

## La indulgencia con la corrupción en España es otro argumento para la independencia de Cataluña

Oriol Martínez Alos-Moner, economista. Mayo de 2018.

*“El solo hecho que estos casos institucionalizados de corrupción no hayan tenido prácticamente costes ni consecuencias para los dos grandes partidos es indicador del precario estado en el que se encuentra hoy la democracia en España.”*

No existe país que esté libre del pecado de la corrupción. La naturaleza humana, en su inclinación hacia poder y dinero, nos expone regularmente a la tentación de buscar nuestro propio beneficio más allá de la ley. No obstante, es injusto tratar a todos los países por igual, pues sería ponernos una venda en los ojos a las diferentes formas con que ésta se manifiesta a lo largo del mundo. Así, aceptamos que, considerando tanto su impacto, como la manera de afrontarla desde las esferas social y política, los grados de corrupción varían significativamente de país a país.

Un ejemplo de ello es España, donde la corrupción aumenta a medida que nos desplazamos al sur. Así, la región más meridional, Andalucía, es un claro ejemplo de la irresponsabilidad con la que las instituciones públicas gestionan el dinero de los contribuyentes en la España moderna. Ahí, el partido que ha gobernado en la región ininterrumpidamente desde el restablecimiento democrático de 1978, el PSOE, ha sido acusado por la oficina anticorrupción de malversación de caudales públicos por un valor de 714 millones de euros. Asimismo, un caso dramático de corrupción a nivel municipal es Marbella, cuna de algunos de los millonarios del mundo más extravagantes, de oligarcas rusos a príncipes saudíes, y que se probó centro de una trama corrupta acusada de blanquear 2.400 millones de euros.

Pero ésta no sería más que la punta del iceberg de una corrupción institucionalizada en las más altas esferas de la política española. Caso paradigmático de ello fue el año pasado, cuando la Unidad de delitos económicos y financieros de la policía nacional acusó al actual partido gobernante, el Partido Popular, de ser una organización criminal. Su llamada “trama Gürtel” sería responsable de un sistema de doble contabilidad bajo la cual se realizaban pagos periódicos a un gran número de líderes del partido, y usando dinero obtenido básicamente vía recualificaciones urbanísticas, centradas en Madrid y en su *hinterland*. Conviene notar que, de entre sus beneficiarios, se encuentra el presidente del país, Mariano Rajoy, como testifican apuntes contables de pago a un tal “M. Rajoy”.

El solo hecho que estos casos institucionalizados de corrupción no hayan tenido prácticamente costes ni consecuencias para los dos grandes partidos es indicador del precario estado en el que se encuentra hoy la democracia en España. Por ello, no será inapropiado afirmar que en España la política y la corrupción van de la mano, así como que, siendo realistas, no existen opciones plausibles de cambiar el actual estado de las cosas. Por un lado, Podemos –que se presentaba como la alternativa de izquierdas hace unos años– aparece ahora como incapaz de implementar su otrora esperanzador programa regenerador inicial.

En el campo opuesto se encuentra Ciudadanos, seguramente el peor de los remedios a la crisis institucional y política. Habiendo emergido, en parte, de medios nacionalistas españoles de Barcelona, financiado por la oligarquía más cerril y conservadora, la principal razón de ser de este partido, como es bien sabido, es la de derrotar el movimiento independentista catalán, a todo coste, sea por la demagogia más ruin que adoptando el rol de falsa víctima. Una buena prueba de la falta de marco moral en este partido es el reciente caso de corrupción de la popular Cristina Cifuentes, hoy ya apartada de la presidencia de la Comunidad de Madrid. A lo largo de este escándalo público, Ciudadanos se mantuvo siempre ambiguo, y sólo adoptó una posición crítica después de conocer los resultados de un sondeo de opinión, y no, pues, aplicando sus principios éticos (al parecer inexistentes).

Y terminamos en Cataluña, donde mucho se ha escrito y dicho sobre la caída de Jordi Pujol, la gran figura política post-dictadura franquista (en la que sufrió tres años de cárcel), objeto de un linchamiento verbal sin precedentes por parte de la prensa española, en un cuasi-juicio paralelo. Pero incluso este caso demuestra el contraste entre las diferentes maneras de enfocar la corrupción entre las sociedades catalana y española. Por un lado, Pujol, junto con su familia, no obstante la todavía falta de evidencias sólidas de las prácticas de las que se le acusa –y que no negamos tampoco– fue rápidamente marginado de la sociedad catalana. Por el otro el contraste de la impunidad, social y política, de la mayoría de políticos implicados en casos de corrupción en España –empezando por realeza y gobierno.